

Gaceta Departamental

Registrando la historia de Antioquia desde 1908



EDICIÓN DE 62 PÁGINAS

Registrado en el Ministerio de Gobierno por Resol. No. 000474 de junio de 1967 - Tarifa postal reducida No. 2333 de la Admón Postal Nal. - Porte Pagado

No.19.190

COMERCIALES

SUMARIO RESOLUCIONES MAYO 2012

NUMERO	FECHA	PAGINA	NUMERO	FECHA	PAGINA
041386	Mayo 15 de 2012	2	041392	Mayo 15 de 2012	25
041387	Mayo 15 de 2012	5	041393	Mayo 15 de 2012	29
041388	Mayo 15 de 2012	6	041394	Mayo 15 de 2012	34
041389	Mayo 15 de 2012	13	041395	Mayo 15 de 2012	37
041390	Mayo 15 de 2012	17	041396	Mayo 15 de 2012	41
041391	Mayo 15 de 2012	20	041397	Mayo 15 de 2012	45



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA GENERAL
Imprenta Departamental de Antioquia
Dr. Sergio Arroyave Maya
Director



ORDEN AL MÉRITO
CÍVICO Y EMPRESARIAL
MARISCAL JORGE ROBLEDO
CATEGORÍA ORO



RESOLUCIÓN N° 041386

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 24 de agosto de 2010, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al establecimiento denominado **Restaurante Asados El Mellito** ubicado en el Corregimiento El Mellito del municipio de Necoclí, Antioquia, cuyo **Propietario** es el señor **Eliecer Antonio Torres Causil** identificado con cédula de ciudadanía No. 71.979.835.

Que mediante Auto No. 22724 del 31 de octubre de 2011, se inició la presente investigación y por Auto No. 470 del 8 de marzo de 2012 se formuló cargos al señor **Eliecer Antonio Torres Causil**, en su calidad de **Propietario** del establecimiento denominado **Restaurante Asados El Mellito**, por infringir los artículos 84 literal d, 92, 192 y 207 de la Ley 9 de 1979 y artículo 8 literales p y q, artículo 36 literal d y artículo 37 literal a y artículo 14 literal a del Decreto 3075 de 1997.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente al involucrado, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, no presentó sus descargos, dejando inactivo su derecho de defensa.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 24 de agosto de 2010, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con los artículos 576 de la Ley 9 de 1979 y 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien



considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Como se anotó anteriormente, en visita realizada el día 29 de Octubre de 2008 al **Restaurante Asados El Mellito**, y de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 69 y 70 del Decreto 3075 de 1997, se dejaron requerimientos los cuales constan en la respectiva acta visita, por el incumplimiento a los requisitos higiénico locativos en el restaurante escolar y del establecimiento en general, específicamente por que los empleados no cuentan con el curso de manipulación de alimentos, con la indumentaria necesaria, los recipientes para la basura no cuentan con tapa, no se dispone adecuadamente de los residuos, no cuenta con lavaplatos y los pisos no son adecuados.

La Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

También es pertinente aclarar que el como distribuidor de alimentos, debe tener como objetivo el cuidado y la conservación de los mismos, conservándolos con las especificaciones técnicas con las que fueron fabricados, para lo cual deben garantizar el mantenimiento de las condiciones ambientales de almacenamiento de productos, teniendo en cuenta algunas características relacionadas con la luz, la temperatura, humedad y combustibilidad.

Igualmente se debe contar con unas condiciones higiénico - locativas, las cuales han sido reglamentadas para este tipo de establecimiento, con el propósito de garantizar la calidad de los alimentos que se distribuyen al público y que están contenidas en los artículos 84 literal d, 92, 192 y 207 de la Ley 9 de 1979 y artículo 8 literales p y q, artículo 36 literal d y artículo 37 literal a y artículo 14 literal a del Decreto 3075 de 1997.

Por otra parte el Decreto 3075 de 1997 ha determinado que todas las personas que realicen actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en materia de educación sanitaria, especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. Igualmente deben estar capacitados para llevar a cabo las tareas que se les asignen, con el fin de que sepan adoptar las precauciones necesarias para evitar la contaminación de los alimentos.

De igual forma, como generador de residuos, debe garantizar ambiental y sanitariamente un adecuado tratamiento y disposición final de los mismos, por lo tanto deben dar aplicación al código de colores y por ende el uso de recipientes reutilizables (canecas) y bolsas plásticas desechables, que implemento el manual de procedimiento para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, adoptado por la Resolución No. 1164 de 2002, expedida conjuntamente entre el Ministerio de Protección Social y el Ministerio del Medio Ambiente.

La actividad que realiza el señor **Eliecer Antonio Torres Causil**, en el establecimiento denominado **Restaurante Asados El Mellito**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.



Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la ***“producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...”*** Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en ***la prevalencia del interés general.***”

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para el señor **Eliecer Antonio Torres Causil** el hecho de no haber sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE:**

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Eliecer Antonio Torres Causil** identificado con cédula de ciudadanía No. 71.979.835, en su calidad de **Propietario** del **Restaurante Asados El Mellito** ubicado en el Corregimiento El Mellito del municipio de Necoclí Antioquia, con **MULTA** equivalentes a **VEINTE (20) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**, en la cuenta de ahorros del **Banco Popular No. 18072008-8** o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. **38611336-9**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los 15 MAY 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Comité Calificador, Resolución No. 7807 del 05 de octubre de 2004

RESOLUCIÓN Nº 041387

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por



el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 24 de febrero de 2010, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al establecimiento denominado **Restaurante Blanco y Rojo** ubicado en el Corregimiento El Mellito del municipio de Necoclí, Antioquia, cuya **Propietaria** es la señora **Arelis Padilla Arteaga** identificada con cédula de ciudadanía No. 32.202.519 y su **Administrador** el señor **Deiner Anaya Yanes** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.039.080.780.

Que mediante Auto No. 22976 del 17 de noviembre de 2011, se inició la presente investigación y por Auto No. 472 del 8 de marzo de 2012 se formuló cargos a la señora **Arelis Padilla Arteaga** y al señor **Deiner Anaya Yanes**, en sus calidades de **Propietaria y Administrador**, respectivamente, del establecimiento denominado **Restaurante Blanco y Rojo**, por infringir el artículo 8 literal m, artículo 13 literal a y artículo 14 literal a del Decreto 3075 de 1997.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente a los involucrados, para que ejercieran su derecho de defensa, respetándoles de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, no presentaron sus descargos, dejando inactivo su derecho de defensa.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 24 de febrero de 2010, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con los artículos 576 de la Ley 9 de 1979 y 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Como se anotó anteriormente, en visita realizada el día 24 de febrero de 2010 al **Restaurante Blanco y Rojo** y de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 69 y 70 del Decreto 3075 de 1997, se dejaron requerimientos los cuales constan en la respectiva acta visita, por el incumplimiento a los requisitos higiénico locativos en el establecimiento en general, específicamente por el tanque de almacenamiento de agua



no se encuentra protegido y el hecho de que los empleados no acreditan el curso de manipuladores, motivo por el cual se aplicó la clausura del establecimiento como medida sanitaria de seguridad.

También es pertinente aclarar que el como distribuidor de alimentos, debe tener como objetivo el cuidado y la conservación de los mismos, conservándolos con las especificaciones técnicas con las que fueron fabricados, para lo cual deben garantizar el mantenimiento de las condiciones ambientales de almacenamiento de productos, teniendo en cuenta algunas características relacionadas con la luz, la temperatura, humedad y combustibilidad.

Igualmente se debe contar con unas condiciones higiénico - locativas, las cuales han sido reglamentadas para este tipo de establecimiento, con el propósito de garantizar la calidad de los alimentos que se distribuyen al público y que están contenidas en el artículo 8 literal m, artículo 13 literal a y artículo 14 literal a del Decreto 3075 de 1997.

Por otra parte el Decreto 3075 de 1997 ha determinado que todas las personas que realicen actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en materia de educación sanitaria, especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. Igualmente deben estar capacitados para llevar a cabo las tareas que se les asignen, con el fin de que sepan adoptar las precauciones necesarias para evitar la contaminación de los alimentos.

Es de anotar que al momento de imponer la sanción, no se tendrá en cuenta el cargo formulado por el hecho de no se realizar los controles médicos a los empleados, puesto que estos controles solo serán necesarios, siempre y cuando un profesional de la medicina así lo determine.

La Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza la señora **Arelis Padilla Arteaga** y el señor **Deiner Anaya Yanes**, en el establecimiento denominado **Restaurante Blanco y Rojo**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la *“producción, **distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...**”* Y es precisamente en desarrollo de ese



mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general.**"

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

En cuanto a la responsabilidad de los implicados, el Decreto 3075 de 1997 determinó que la salud es un bien de interés público, en consecuencia, las disposiciones contenidas en el son de orden público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, por tanto claramente el artículo 40 del citado Decreto, determinó que los propietarios y los administradores de los establecimientos que comercializan alimentos son responsable de la higiene, conservación y protección de los mismos.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante la señora **Arelis Padilla Arteaga** y el señor **Deiner Anaya Yanes** el hecho de no haber sido sancionados antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Por todo lo anterior, es necesario hacerles saber a los implicados que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.



En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la señora **Arelis Padilla Arteaga** identificada con cédula de ciudadanía No. 32202519 y al señor **Deiner Anaya Yanes** identificado con cédula de ciudadanía No. 1039080780, en sus calidades de **Propietaria y Administrador** respectivamente del **Restaurante Blanco y Rojo** ubicado en la Corregimiento El Mellito del municipio de Necoclí, Antioquia, con **AMONESTACIÓN**, y se les conmina a dar cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los 15 MAY 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N°

041388

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 31 de mayo de 2011, la Policía Nacional del Municipio de Armenia realizó una incautación de doce (12) Kilos de carne, por transporte inadecuado, al **Vehículo de placas RIB 585**, cuyo **Propietario** es el señor **Oscar Gonzalo Gil** identificado con cédula de ciudadanía No. 71.420.648; y lo puso a disposición del Técnico del Área de la Salud adscrito a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia quien procedió a aplicar medida sanitaria de seguridad consistente en el decomiso y posterior desnaturalización.

Que mediante Auto No. 87 del 10 de enero de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 466 del 8 de marzo de 2012 se formuló cargos al señor **Oscar Gonzalo Gil**, en su calidad de **Propietario** del **Vehículo de placas RIB 585**, por infringir los artículos 278; 279, 304, 305, 341 e Inciso final del Artículo 345 de la Ley 9 de 1979 y literal c artículo 31 Decreto 3075 de 1997, Artículo 39 numeral 2 del Decreto 1500 de 2007.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente al involucrado, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, no presentó sus descargos, dejando inactivo su derecho de defensa.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 31 de mayo de 2011, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Los artículos 278, 279 y 341 de la Ley 9 de 1979 y artículo 39 numeral 2 del Decreto 1500 de 2007, han determinado que los vehículos destinados para el transporte de carnes deberán ser diseñados y contruidos en forma que protejan los productos de contaminaciones y aseguren su correcta conservación, para lo cual deberán contar con equipos adecuados y un sistema que permita mantener los productos a una altura que impida su contacto con el piso.

Respecto a la violación a los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, dichos artículos establecen la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos lo que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, en virtud de ello se considera que la carne transportada sin las adecuadas condiciones sanitarias no es comercializables.

La Ley 9ª de 1979 y el Decreto 1500 de 2007 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza el señor **Oscar Gonzalo Gil**, en su Vehículo de placas RIB 585, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la “*producción, **distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...***” Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general.**”

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante

para el señor **Oscar Gonzalo Gil** el hecho de no haber sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Oscar Gonzalo Gil** identificado con cédula de ciudadanía No. 71.420.648, en su calidad de **Propietario del Vehículo de placas RIB 585**, con **MULTA** equivalente a **VEINTE (20) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los 15 MAY 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 041389

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 15 de junio de 2011, la Policía Nacional del Municipio de Mutatá realizó una incautación de de carne, por transporte inadecuado, al **Vehículo de placas TIZ 312**, cuyo **Propietario** es el señor **Dannv Alexander Guisao Valdez**

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.128.471.521; y lo puso a disposición del Técnico del Área de la Salud adscrito a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia quien procedió a aplicar medida sanitaria de seguridad consistente en el decomiso y posterior desnaturalización.

Que mediante Auto No. 84 del 10 de enero de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 471 del 8 de marzo de 2012 se formuló cargos al señor **Danny Alexander Guisao Valdez**, en su calidad de **Propietario del Vehículo de placas TIZ 312**, por infringir los artículos 278; 279, 304, 305, 341 e Inciso final del Artículo 345 de la Ley 9 de 1979 y literal c artículo 31 Decreto 3075 de 1997.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente al involucrado, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, no presentó sus descargos, dejando inactivo su derecho de defensa.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 15 de junio de 2011, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Los artículos 278, 279 y 341 de la Ley 9 de 1979, han determinado que los vehículos destinados para el transporte de carnes deberán ser diseñados y contruidos en forma que protejan los productos de contaminaciones y aseguren su correcta conservación, para lo cual deberán contar con equipos adecuados y un sistema que permita mantener los productos a una altura que impida su contacto con el piso.

Respecto a la violación a los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, dichos artículos establecen la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos lo que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, en virtud de ello se considera que la carne transportada sin las adecuadas condiciones sanitarias no es comercializables.

La Ley 9ª de 1979 y el Decreto 1500 de 2007 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza el señor **Danny Alexander Guisao Valdez**, en su **Vehículo de placas TIZ 312**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la *"producción, **distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...**"* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en ***la prevalencia del interés general.***"

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para el señor **Danny Alexander Guisao Valdez** el hecho de no haber sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*

e) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Danny Alexander Guisao Valdez** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.128.471.521, en su calidad de **Propietario del Vehículo de placas TIZ 312**, con **MULTA** equivalente a **CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

15 MAY 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 041390
15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA
SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 5 de agosto de 2010, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al establecimiento denominado **Abastos Paguemenos # 2** ubicado en el Corregimiento Totumo del municipio de Necoclí, Antioquia, cuyo **Propietario** es el señor **Jhony Zuluaga Montes** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.092.526.

Que mediante Auto No. 22727 del 31 de octubre de 2011, se inició la presente investigación y por Auto No. 513 del 13 de marzo de 2012 se formuló cargos al señor **Jhony Zuluaga Montes**, en su calidad de **Propietario** del establecimiento denominado **Abastos Paguemenos # 2**, por infringir el artículo 271 de la Ley 9ª de 1979 y Artículos 50, 125, 127 inciso primero, 128 del Decreto 2310 de 1986.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente al involucrado, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, no presentó sus descargos, dejando inactivo su derecho de defensa.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 5 de agosto de 2010, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de

interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

El artículo 271 de la Ley 9 de 1979, determinó que los alimentos y bebidas, empacados o envasados, destinados para venta al público, deben llevar un rótulo en su empaque, el cual debe contener el nombre del producto, el nombre y dirección del fabricante, el contenido neto en unidades del Sistema Internacional SI, registro sanitario e Ingredientes.

Es así como Artículos 50, 125, 127 inciso primero, 128 de la Resolución 2310 de 1986 regulan el contenido que deben llevar los alimentos en los envases, rótulos, etiquetas y empaques, de allí radica la importancia de la información de la fecha de vencimiento, lote, marca, los cuales al carecer de esta información son motivo de decomiso por el riesgo que puede llevar a incurrir en errores de despacho, suministro, dispensación de alimentos.

Por ello los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, establecen la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos lo que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, en virtud de ello se considera que los alimentos que no cumplan con el rotulado y etiqueta no son comercializables.

La Ley 9ª de 1979 y la Resolución 2310 de 1986 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza el señor **Jhony Zuluaga Montes**, en el establecimiento denominado **Abastos Paguemenos # 2**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Además es su responsabilidad, no sólo adquirir los productos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización, a través de una adecuada recepción y revisando que cada producto tenga la información correspondiente a cantidad de unidades, número de lote, registro sanitario, fechas de vencimiento.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la *“producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados....”* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general.**

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para el señor **Jhony Zuluaga Montes** el hecho de no haber sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Tener Productos que incumplan Normas de Calidad en Etiquetas, Rótulos y Empaques, sin importar la cantidad que sea, ponen en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

MP

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Jhony Zuluaga Montes** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.092.526, en su calidad de **Propietario** del



establecimiento denominado **Abastos Paguemenos # 2** ubicado en la Corregimiento Totumo del municipio de Necoclí, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

15 MAY 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAUL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 041391

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 6 de abril de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al **Súpermercado Agencia La Unión** ubicado en la Calle 10 No. 9 - 65 del municipio de La Unión, Antioquia, cuya **Propietaria** es la señora **Olga Helena Arboleda Ocampo** identificada con cédula de ciudadanía No. 43.472.716.

Que mediante Auto No. 66 del 10 de enero de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 476 del 8 de marzo de 2012 se formuló cargos a la señora **Olga Helena Arboleda Ocampo**, en su calidad de **Propietaria** del establecimiento denominado **Súpermercado Agencia La Unión**, por infringir los artículos 271, 304, 305 y 306 de la Ley 9ª de 1979, Artículo 41 del Decreto 3075 de 1997 y numeral 5.8 del artículo 5 de la Resolución 5109 de 2005.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente a la involucrada, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentó los respectivos descargos dentro del término de ley.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 6 de abril de 2011, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

El artículo 271 de la Ley 9 de 1979, determinó que los alimentos y bebidas, empacados o envasados, destinados para venta al público, deben llevar un rótulo en su empaque, el cual debe contener el nombre del producto, el nombre y dirección del fabricante, el contenido neto en unidades del Sistema Internacional SI, registro sanitario e Ingredientes.

Por su parte la Resolución No. 5109 de 2005 expedida por el Ministerio de la Protección Social, regula el contenido que deben llevar los alimentos en los envases, rótulos, etiquetas y empaques, de allí radica la importancia de la

información de la fecha de vencimiento, lote, marca, los cuales al carecer de esta información son motivo de decomiso por el riesgo que puede llevar a incurrir en errores de despacho, suministro, dispensación de alimentos.

Respecto a la violación a los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, dichos artículos establece la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos lo que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, en virtud de ello se considera los alimentos sin registro sanitario son fraudulentos y por lo tanto no son comercializables.

En cuanto al hecho de carecer de Registro Sanitario, se le recuerda a la implicada que todo alimento que se expendan directamente al consumidor bajo marca de fábrica y con nombres determinados, deberá obtener registro sanitario expedido conforme a lo establecido en el Decreto 3075 de 1997.

La Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución No. 5109 de 2005 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza la señora **Olga Helena Arboleda Ocampo**, en el establecimiento denominado **Súpermercado Agencia La Unión**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Además es su responsabilidad, no sólo adquirir los productos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización, a través de una adecuada recepción y revisando que cada producto tenga la información correspondiente a cantidad de unidades, número de lote, registro sanitario, fechas de vencimiento.

Es por ello por lo que los argumentos planteados en el escrito de descargos carecen en absoluto de soporte no sólo probatorio sino legal, toda vez que como **Propietaria** le es exigible, de acuerdo con la ley, una mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, por la trascendencia social que representa la comercialización de alimentos, al estar de por medio tal como se expuso con antelación la salud de la población.

Por otra parte, el artículo 9º del Código Civil Colombiano, establece que **“La ignorancia de la ley no sirve de excusa”**. Y en tal sentido, en uno de los múltiples pronunciamientos que sobre éste aspecto ha hecho la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Sala Plena de marzo 30 de 1978, señaló que *“Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora, equivale a establecer un privilegio a su favor, violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico”*. Se ha

hecho ésta reseña legislativa para concluir que bajo ninguna circunstancia le asiste justificación alguna a la implicada para pretender evadir su responsabilidad en los hechos.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la “*producción, **distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...***” Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general.**”

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

El Artículo 91 del Decreto 3075 de 1997 establece que de la aplicación de una medida sanitaria de seguridad se iniciará inmediatamente el respectivo procedimiento sancionatorio que debe cumplir con los postulados del debido proceso pues éste rige también las actuaciones administrativas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 29 de la Constitución Política, tal como se cumplió en el caso particular.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

La responsabilidad imputada frente a las irregularidades encontradas en la visita realizada al establecimiento, se le atribuye a la investigada, a título de **culpa grave**, por la imprevisión, la negligencia y el descuido en el manejo de los productos y por ende, del establecimiento como tal, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes, al tenor del artículo 63 del Código Civil.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para la señora **Olga Helena Arboleda Ocampo** el hecho de no haber sido sancionada antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas

inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber a la implicada que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la señora **Olga Helena Arboleda Ocampo** identificada con cédula de ciudadanía No. 43.472.716, en su calidad de **Propietaria del Súpermercado Agencia La Unión** ubicado en la Calle 10 No. 9 - 65 del municipio de La Unión, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **SETENTA (70) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

15 MAY 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAUL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 041392

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 6 de abril de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al **Supermercado Merquecasa** ubicado en la Calle 10 del municipio de La Unión, Antioquia, cuya **Propietaria** es la señora **María Eugenia Ocampo Martínez** identificada con cédula de ciudadanía No. 43.458.168.

Que mediante Auto No. 70 del 10 de enero de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 480 del 8 de marzo de 2012 se formuló cargos a

la señora **María Eugenia Ocampo Martínez**, en su calidad de **Propietaria** del establecimiento denominado **Supermercado Merquecasa**, por infringir los artículos 271, 304, 305 y 306 de la Ley 9ª de 1979, Artículo 41 del Decreto 3075 de 1997 y numeral 5.8 del artículo 5 de la Resolución 5109 de 2005.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente a la involucrada, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentó los respectivos descargos dentro del término de ley.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 6 de abril de 2011, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

El artículo 271 de la Ley 9 de 1979, determinó que los alimentos y bebidas, empacados o envasados, destinados para venta al público, deben llevar un rótulo en su empaque, el cual debe contener el nombre del producto, el nombre y dirección del fabricante, el contenido neto en unidades del Sistema Internacional SI, registro sanitario e Ingredientes.

Por su parte la Resolución No. 5109 de 2005 expedida por el Ministerio de la Protección Social, regula el contenido que deben llevar los alimentos en los envases, rótulos, etiquetas y empaques, de allí radica la importancia de la información de la fecha de vencimiento, lote, marca, los cuales al carecer de esta información son motivo de decomiso por el riesgo que puede llevar a incurrir en errores de despacho, suministro, dispensación de alimentos.

Respecto a la violación a los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, dichos artículos establece la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos lo que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, en virtud de ello se considera los alimentos sin registro sanitario son fraudulentos y por lo tanto no son comercializables.

En cuanto al hecho de carecer de Registro Sanitario, se le recuerda a la implicada que todo alimento que se expendía directamente al consumidor bajo marca de fábrica y con nombres determinados, deberá obtener registro sanitario expedido conforme a lo establecido en el Decreto 3075 de 1997.

La Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución No. 5109 de 2005 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los

asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza la señora **María Eugenia Ocampo Martínez**, en el establecimiento denominado **Supermercado Merquecasa**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Además es su responsabilidad, no sólo adquirir los productos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización, a través de una adecuada recepción y revisando que cada producto tenga la información correspondiente a cantidad de unidades, número de lote, registro sanitario, fechas de vencimiento.

Es por ello por lo que los argumentos planteados en el escrito de descargos carecen en absoluto de soporte no sólo probatorio sino legal, toda vez que como **Propietaria** le es exigible, de acuerdo con la ley, una mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, por la trascendencia social que representa la comercialización de alimentos, al estar de por medio tal como se expuso con antelación la salud de la población.

Por otra parte, el artículo 9º del Código Civil Colombiano, establece que **“La ignorancia de la ley no sirve de excusa”**. Y en tal sentido, en uno de los múltiples pronunciamientos que sobre éste aspecto ha hecho la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Sala Plena de marzo 30 de 1978, señaló que *“Excluír de la obediencia de la ley a quien la ignora, equivale a establecer un privilegio a su favor, violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico”*. Se ha hecho ésta reseña legislativa para concluir que bajo ninguna circunstancia le asiste justificación alguna a la implicada para pretender evadir su responsabilidad en los hechos.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la **“producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...”** Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general.**

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

El Artículo 91 del Decreto 3075 de 1997 establece que de la aplicación de una medida sanitaria de seguridad se iniciará inmediatamente el respectivo procedimiento sancionatorio que debe cumplir con los postulados del debido proceso pues éste rige también las actuaciones administrativas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 29 de la Constitución Política, tal como se cumplió en el caso particular.

La responsabilidad imputada frente a las irregularidades encontradas en la visita realizada al establecimiento, se le atribuye a la investigada, a título de **culpa grave**, por la imprevisión, la negligencia y el descuido en el manejo de los productos y por ende, del establecimiento como tal, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes, al tenor del artículo 63 del Código Civil.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para la señora **María Eugenia Ocampo Martínez** el hecho de no haber sido sancionada antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) Amonestación.*
- b) Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) Decomiso.*
- d) Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber a la implicada que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la señora **María Eugenia Ocampo Martínez** identificada con cédula de ciudadanía No. 43.458.168, en su calidad de **Propietaria del Supermercado Merquecasa** ubicado en la Calle 10 del municipio de La Unión, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **VEINTE (20) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación.

De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

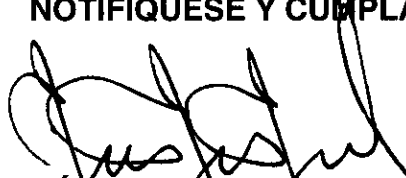
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la implicada, haciéndole saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

15 MAY 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N°

041393

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 6 de abril de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al establecimiento denominado **Autoservicio San Agustín** ubicado en la Calle 11 No. 12 - 8 del municipio de La Unión, Antioquia, cuyo **Propietario** es el señor **Saúl Gómez Jaramillo** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.384.344.

Que mediante Auto No. 95 del 10 de enero de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 479 del 8 de marzo de 2012 se formuló cargos al señor Saúl Gómez Jaramillo, en su calidad de **Propietario** del establecimiento denominado **Autoservicio San Agustín**, por infringir los artículos 271, 304, 305 y 306 de la Ley 9ª de 1979, Artículos 34 y 41 del Decreto 3075 de 1997 y numeral 5.8 del artículo 5 de la Resolución 5109 de 2005.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente al involucrado, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentó los respectivos descargos dentro del término de ley.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 6 de abril de 2011, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, establecen la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano, como lo son los alimentos

alterados, adulterados, falsificados, contaminados, o los que por otras características anormales puedan afectar la salud del consumidor.

Por su lado el artículo 34 del Decreto 3075 de 1997, establece que durante las actividades de distribución y comercialización de Alimentos y materias primas deberá garantizarse el mantenimiento de las condiciones sanitarias de estos, en virtud de ello se considera que los alimentos con fecha de vencimiento expirada no son comercializables, pues ya no se garantiza la calidad, ni las cualidades específicas que espera el consumidor y por lo tanto no son aptos para el consumo humano.

En cuanto a los productos que carecían de Registro Sanitario, se le recuerda al implicado que todo alimento que se expendiera directamente al consumidor bajo marca de fábrica y con nombres determinados, deberá obtener registro sanitario expedido conforme a lo establecido en el Decreto 3075 de 1997.

El artículo 271 de la Ley 9 de 1979, determinó que los alimentos y bebidas, empacados o envasados, destinados para venta al público, deben llevar un rótulo en su empaque, el cual debe contener el nombre del producto, el nombre y dirección del fabricante, el contenido neto en unidades del Sistema Internacional SI, registro sanitario e Ingredientes.

Por su parte la Resolución 5109 de 2005 expedida por el Ministerio de la Protección Social, regula el contenido que deben llevar los alimentos en los envases, rótulos, etiquetas y empaques, de allí radica la importancia de la información de la fecha de vencimiento, lote, marca, los cuales al carecer de esta información son motivo de decomiso por el riesgo que puede llevar a incurrir en errores de despacho, suministro, dispensación de alimentos.

Frente lo anterior, manifiesta el implicado que estas situaciones nunca se había presentado, que en compañía de sus empleados han desarrollado una estrategia para que no vuelvan a presentarse situaciones como las que originaron el presente investigativo, reconoce los errores y se compromete a estar vigilante y atento para el cumplimiento de la estrategia.

La Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución 5109 de 2005 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza el señor **Saúl Gómez Jaramillo**, en el establecimiento denominado **Autoservicio San Agustín**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

El hecho que haya dado cumplimiento a todos los requerimientos dejados en la visita y que reconozca los errores, no lo exime de la responsabilidad administrativa que ello acarrea, además que como **Propietario** del establecimiento le es exigible, de acuerdo con la ley, una mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, por la trascendencia social que representa la comercialización de alimentos, al estar de por medio la salud de la población.

Además es su responsabilidad, no sólo adquirir los productos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización, a través de una adecuada recepción y revisando que cada producto tenga la información correspondiente a cantidad de unidades, número de lote, registro sanitario, fechas de vencimiento.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la *"producción, **distribución, utilización y consumo de los bienes** y en los servicios públicos y privados..."* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en ***la prevalencia del interés general.***"

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para el señor **Saúl Gómez Jaramillo** el hecho de no haber sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*

- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Saúl Gómez Jaramillo** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.384.344, en su calidad de **Propietario** del establecimiento **Autoservicio San Agustín** ubicado en la Calle 11 No. 12 - 8 del municipio de La Unión, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA**Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**RESOLUCIÓN N° 041394**

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA
SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 6 de abril de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al establecimiento denominado **Pañales Isabela** ubicado en la Calle 10 No. 10 - 31 del municipio de La Unión, Antioquia, cuya **Propietaria** es la señora **Adriana Gaviria López** identificada con cédula de ciudadanía No. 43.615.937.

Que mediante Auto No. 71 del 10 de enero de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 485 del 8 de marzo de 2012 se formuló cargos a la señora **Adriana Gaviria López**, en su calidad de **Propietaria** del establecimiento denominado **Pañales Isabela**, por infringir los artículos 271, 304, 305 y 306 de la Ley 9ª de 1979, Artículo 41 del Decreto 3075 de 1997 y numeral 5.8 del artículo 5 de la Resolución 5109 de 2005.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente a la involucrada, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentó los respectivos descargos dentro del término de ley.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 6 de abril de 2011, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

El artículo 271 de la Ley 9 de 1979, determinó que los alimentos y bebidas, empacados o envasados, destinados para venta al público, deben llevar un rótulo en su empaque, el cual debe contener el nombre del producto, el nombre y dirección del fabricante, el contenido neto en unidades del Sistema Internacional SI, registro sanitario e Ingredientes.

Por su parte la Resolución No. 5109 de 2005 expedida por el Ministerio de la Protección Social, regula el contenido que deben llevar los alimentos en los envases, rótulos, etiquetas y empaques, de allí radica la importancia de la información de la fecha de vencimiento, lote, marca, los cuales al carecer de esta información son motivo de decomiso por el riesgo que puede llevar a incurrir en errores de despacho, suministro, dispensación de alimentos.

Respecto a la violación a los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, dichos artículos establece la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos lo que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, en virtud de ello se considera los alimentos sin registro sanitario son fraudulentos y por lo tanto no son comercializables.

En cuanto al hecho de carecer de Registro Sanitario, se le recuerda a la implicada que todo alimento que se expendi directamente al consumidor bajo marca de fábrica y con nombres determinados, deberá obtener registro sanitario expedido conforme a lo establecido en el Decreto 3075 de 1997.

La Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución No. 5109 de 2005 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza la señora **Adriana Gaviria López**, en el establecimiento denominado **Pañales Isabela**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Además es su responsabilidad, no sólo adquirir los productos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización, a través de una adecuada recepción y revisando que cada producto tenga la información correspondiente a cantidad de unidades, número de lote, registro sanitario, fechas de vencimiento.

Es por ello por lo que los argumentos planteados en el escrito de descargos carecen en absoluto de soporte no sólo probatorio sino legal, toda vez que como **Propietaria** le es exigible, de acuerdo con la ley, una mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, por la trascendencia social que representa la comercialización de alimentos, al estar de por medio tal como se expuso con antelación la salud de la población.

Por otra parte, el artículo 9º del Código Civil Colombiano, establece que "**La ignorancia de la ley no sirve de excusa**". Y en tal sentido, en uno de los múltiples pronunciamientos que sobre éste aspecto ha hecho la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Sala Plena de marzo 30 de 1978, señaló que "*Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora, equivale a establecer un privilegio a su favor, violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico*". Se ha hecho ésta reseña legislativa para concluir que bajo ninguna circunstancia le asiste justificación alguna a la implicada para pretender evadir su responsabilidad en los hechos.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la "**producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados....**" Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general.**"

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

La responsabilidad imputada frente a las irregularidades encontradas en la visita realizada al establecimiento, se le atribuye a la investigada, a título de **culpa grave**, por la imprevisión, la negligencia y el descuido en el manejo de los productos y por ende, del establecimiento como tal, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes, al tenor del artículo 63 del Código Civil.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para la señora **Adriana Gaviria López** el hecho de no haber sido sancionada antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) Amonestación.
- b) Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.
- c) Decomiso.
- d) Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.
- e) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber a la implicada que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

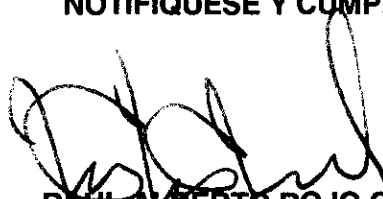
ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la señora **Adriana Gaviria López** identificada con cédula de ciudadanía No. 43.615.937, en su calidad de **Propietaria del Pañales Isabela** ubicado en la Calle 10 No. 10 - 31 del municipio de La Unión, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **VEINTE (20) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la implicada, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N°

041395

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA
SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 6 de abril de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al **Supermercados Don Julio** ubicado en la Carrera 8 del municipio de La Unión, Antioquia, cuyo **Propietario** es el señor **Oscar Julio López Naranjo** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.036.778.695.

Que mediante Auto No. 67 del 10 de enero de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 475 del 8 de marzo de 2012 se formuló cargos al señor **Oscar Julio López Naranjo**, en su calidad de **Propietario** del establecimiento denominado **Supermercados Don Julio**, por infringir los artículos 271, 304, 305 y 306 de la Ley 9ª de 1979, Artículo 41 del Decreto 3075 de 1997 y numeral 5.8 del artículo 5 de la Resolución 5109 de 2005.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente al involucrado, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentó los respectivos descargos dentro del término de ley.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 6 de abril de 2011, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

El artículo 271 de la Ley 9 de 1979, determinó que los alimentos y bebidas, empacados o envasados, destinados para venta al público, deben llevar un rótulo en su empaque, el cual debe contener el nombre del producto, el nombre y dirección del fabricante, el contenido neto en unidades del Sistema Internacional SI, registro sanitario e Ingredientes.

Por su parte la Resolución No. 5109 de 2005 expedida por el Ministerio de la Protección Social, regula el contenido que deben llevar los alimentos en los envases, rótulos, etiquetas y empaques, de allí radica la importancia de la información de la fecha de vencimiento, lote, marca, los cuales al carecer de esta información son motivo de decomiso por el riesgo que puede llevar a incurrir en errores de despacho, suministro, dispensación de alimentos.

Respecto a la violación a los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, dichos artículos establece la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos lo que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, en virtud de ello se considera los alimentos sin registro sanitario son fraudulentos y por lo tanto no son comercializables.

En cuanto al hecho de carecer de Registro Sanitario, se le recuerda al implicado que todo alimento que se expendan directamente al consumidor bajo marca de fábrica y con nombres determinados, deberá obtener registro sanitario expedido conforme a lo establecido en el Decreto 3075 de 1997.

Frente lo anterior, manifiesta el implicado que los alimentos se los adquirió a un señor que llegó al municipio ofreciéndolos a la mayoría de los supermercados aduciendo que eran productos de buena calidad, tal fue su buena fe en la compra que los tenía exhibidos al público, y anota que a pesar de haber vendido estos productos con anterioridad, nunca había sido sancionado.

La Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución No. 5109 de 2005 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza al señor **Oscar Julio López Naranjo**, en el establecimiento denominado **Supermercados Don Julio**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Además es su responsabilidad, no sólo adquirir los productos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización, a través de una adecuada recepción y revisando que cada producto tenga la información correspondiente a cantidad de unidades, número de lote, registro sanitario, fechas de vencimiento.

Es por ello por lo que los argumentos planteados en el escrito de descargos carecen en absoluto de soporte no sólo probatorio sino legal, toda vez que como **Propietario** le es exigible, de acuerdo con la ley, una mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus

deberes, por la trascendencia social que representa la comercialización de alimentos, al estar de por medio tal como se expuso con antelación la salud de la población.

Por otra parte, el artículo 9º del Código Civil Colombiano, establece que ***“La ignorancia de la ley no sirve de excusa”***. Y en tal sentido, en uno de los múltiples pronunciamientos que sobre éste aspecto ha hecho la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Sala Plena de marzo 30 de 1978, señaló que *“Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora, equivale a establecer un privilegio a su favor, violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico”*. Se ha hecho ésta reseña legislativa para concluir que bajo ninguna circunstancia le asiste justificación alguna a la implicada para pretender evadir su responsabilidad en los hechos.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la ***“producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...”*** Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en ***la prevalencia del interés general.***

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para el señor **Oscar Julio López Naranjo** el hecho de no haber sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) Amonestación.
 - b) Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.
 - c) Decomiso.
 - d) Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.
 - e) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.
-

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

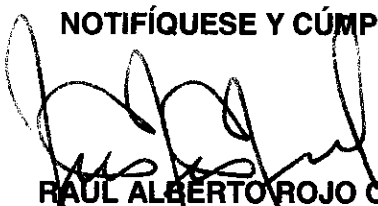
ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Oscar Julio López Naranjo** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.036.778.695, en su calidad de **Propietario** del establecimiento denominado **Supermercados Don Julio** ubicado en la Carrera 8 del municipio de La Unión, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **CIENTO OCHENTA (180) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAUL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 041396

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 6 de abril de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al establecimiento denominado **Supermercado Distribuidora El Parque** ubicado en la Calle 11 No. 9 - 22 del municipio de La Unión, Antioquia, cuyo **Propietario** es el señor **Octavio de Jesús Castaño Bedoya** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.520.352.

Que mediante Auto No. 74 del 10 de enero de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 478 del 8 de marzo de 2012 se formuló cargos al señor **Octavio de Jesús Castaño Bedoya**, en su calidad de **Propietario** del establecimiento denominado **Supermercado Distribuidora El Parque**, por infringir los artículos 271, 304, 305 y 306 de la Ley 9ª de 1979, Artículo 41 del Decreto 3075 de 1997 y numeral 5.8 del artículo 5 de la Resolución 5109 de 2005.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente al involucrado, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentó los respectivos descargos dentro del término de ley.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 6 de abril de 2011, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

El artículo 271 de la Ley 9 de 1979, determinó que los alimentos y bebidas, empacados o envasados, destinados para venta al público, deben llevar un rótulo en su empaque, el cual debe contener el nombre del producto, el nombre y dirección del fabricante, el contenido neto en unidades del Sistema Internacional SI, registro sanitario e Ingredientes.

Por su parte la Resolución No. 5109 de 2005 expedida por el Ministerio de la Protección Social, regula el contenido que deben llevar los alimentos en los envases, rótulos, etiquetas y empaques, de allí radica la importancia de la información de la fecha de vencimiento, lote, marca, los cuales al carecer de esta información son motivo de decomiso por el riesgo que puede llevar a incurrir en errores de despacho, suministro, dispensación de alimentos.

Respecto a la violación a los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, dichos artículos establece la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos lo que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, en virtud de ello se considera los alimentos sin registro sanitario son fraudulentos y por lo tanto no son comercializables.

En cuanto al hecho de carecer de Registro Sanitario, se le recuerda al implicado que todo alimento que se expendi directamente al consumidor bajo marca de fábrica y con nombres determinados, deberá obtener registro sanitario expedido conforme a lo establecido en el Decreto 3075 de 1997.

La Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución No. 5109 de 2005 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza el señor **Octavio de Jesús Castaño Bedoya**, en el establecimiento denominado **Supermercado Distribuidora El Parque**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Además es su responsabilidad, no sólo adquirir los productos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización, a través de una adecuada recepción y revisando que cada producto tenga la información correspondiente a cantidad de unidades, número de lote, registro sanitario, fechas de vencimiento.

Es por ello por lo que los argumentos planteados en el escrito de descargos carecen en absoluto de soporte no sólo probatorio sino legal, toda vez que como **Propietario** le es exigible, de acuerdo con la ley, una mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, por la trascendencia social que representa la comercialización de alimentos, al estar de por medio tal como se expuso con antelación la salud de la población.

Por otra parte, el artículo 9º del Código Civil Colombiano, establece que **“La ignorancia de la ley no sirve de excusa”**. Y en tal sentido, en uno de los múltiples pronunciamientos que sobre éste aspecto ha hecho la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Sala Plena de marzo 30 de 1978, señaló que *“Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora, equivale a establecer un privilegio a su favor, violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico”*. Se ha hecho ésta reseña legislativa para concluir que bajo ninguna circunstancia le asiste justificación alguna a la implicada para pretender evadir su responsabilidad en los hechos.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda

persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la ***“producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...”*** Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en ***la prevalencia del interés general.***”

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

La responsabilidad imputada frente a las irregularidades encontradas en la visita realizada al establecimiento, se le atribuye al investigado, a título de **culpa grave**, por la imprevisión, la negligencia y el descuido en el manejo de los productos y por ende, del establecimiento como tal, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes, al tenor del artículo 63 del Código Civil.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para el señor **Octavio de Jesús Castaño Bedoya** el hecho de no haber sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Octavio de Jesús Castaño Bedoya** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.520.352, en su calidad de **Propietario** del **Supermercado Distribuidora El Parque** ubicado en la Calle 11 No. 9 - 22 del municipio de La Unión, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **VEINTE (20) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al implicado, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 041397

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia,

conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 8 de abril de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al establecimiento denominado **Granero Romar** ubicado en la Calle 9 No. 8 - 13 del municipio de La Unión, Antioquia, cuyo **Propietario** es el señor **Omar de Jesús Valencia Pavas** identificado con cédula de ciudadanía No. 17.158.437.

Que mediante Auto No. 68 del 10 de enero de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 477 del 8 de marzo de 2012 se formuló cargos al señor **Omar de Jesús Valencia Pavas**, en su calidad de **Propietario** del establecimiento denominado **Granero Romar**, por infringir los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, Artículo 34 del Decreto 3075 de 1997 y la definición de "**FECHA LIMITE DE UTILIZACION**" contenida en el artículo 3 de la Resolución 5109 de 2005.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente al involucrado, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentó los respectivos descargos dentro del término de ley.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 8 de abril de 2011, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, establecen la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos lo que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, en virtud de ello se considera que si los alimentos con fecha de vencimiento expirada no son comercializables tal como lo establece el artículo 3 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de la Protección Social, pues ya no se garantiza la calidad, ni las cualidades específicas que espera el consumidor y por lo tanto no son aptos para el consumo humano.

Respecto a la violación al artículo 34 del Decreto 3075 de 1997, dicho artículo establece que durante las actividades de distribución y comercialización de Alimentos y materias primas deberá garantizarse el mantenimiento de las condiciones sanitarias de estos, precisamente por esa razón fueron sujetos de aplicación de la medida sanitaria consistente en decomiso.

Frente lo anterior, manifiesta el implicado en sus descargos que reconoce que los productos fueron decomisados en su establecimiento, pero esto se debió al descuido de los empleados y los mercaderistas, pero que nunca fue su intención ir en contra de la norma.

La Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza el señor **Omar de Jesús Valencia Pavas**, en el establecimiento denominado **Granero Romar**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la *“producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...”* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general.**

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Es por ello que los argumentos presentados por el implicado en el escrito de descargos carecen en absoluto de soporte no sólo probatorio sino legal, toda vez que como **Propietario** le es exigible, de acuerdo con la ley, una mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, por la trascendencia social que representa la comercialización de alimentos, al estar de por medio tal como se expuso con antelación la salud de la población.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para el señor **Omar de Jesús Valencia Pavas** el hecho de no haber sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

a) Amonestación.

- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Omar de Jesús Valencia Pavas** identificado con cédula de ciudadanía No. 17.158.437, en su calidad de **Propietario** del establecimiento denominado **Granero Romar** ubicado en la Calle 9 No. 8 - 13 del municipio de La Unión, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **TREINTA (30) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

AUTO

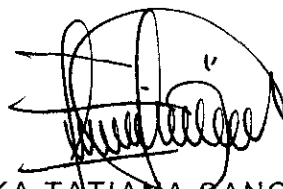
Medellín, 12 JUN. 2012

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6° del Decreto Nacional número 1529 del 12 de julio de 1990, inscribese en el libro respectivo el nombre de la señora LINA MARIA QUIRAMA ARBOLEDA, identificada con cédula de ciudadanía número 43.997.185 como Representante Legal, en su calidad de Directora Ejecutiva de la FUNDACIÓN ANDINA PARA EL DESARROLLO, LA CULTURA Y EL SER, identificada con la sigla "FUNDACER" con domicilio en el Municipio de Medellín, quien está facultada para ejercer sus funciones a partir de la fecha de su elección, según consta en Acta número 23 de la Junta Directiva realizada el día 15 de mayo de 2012.

Publíquese en la Gaceta Departamental a costa de los interesados, surtido el trámite produce efectos legales.

N° 161085 1 Vez

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



ERIKA TATIANA SANCHEZ GOMEZ
Directora Administrativa y Contractual

OTROSI POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO
AL CONTRATO No. 2011-OO-20-151H

Entre los suscritos a saber **MARIA CRISTINA MESA ZAPATA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.42.797.946, expedida en La Estrella (Ant.), en su calidad de Secretaria de Infraestructura Fisica, debidamente facultada por Resolución 017042 de 10 de junio de 2011, que en adelante, para los efectos del presente contrato, se denominará **EL CONTRATANTE** y **RUTH ELENA TABARES ZULETA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.303.454 expedida en Manizales, quien actúa en nombre propio, han convenido celebrar el presente Otrosí al Contrato de Interventoría No. 2011-SS-20-151CH, previa las siguientes consideraciones: 1ª. Que como resultado del Proceso de Selección invitación IN-2011-SS-20-39CH y de conformidad con los requisitos, condiciones, exigencias, especificaciones y demás parámetros dispuestos en los estudios previos, entre el **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** y **RUTH ELENA TABARES ZULETA**, se celebró el Contrato de Interventoría No. 2011-SS-20-151CH, cuyo objeto acordado en la cláusula primera del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA AUTOPISTA - GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 2ª. Que se hace necesario modificar la forma de pago establecida en el mencionado contrato y Otrosí. que se han generado al respecto. 3ª. Que es necesario

adecuar la forma de pago establecida con el fin de garantizar liquidez de recursos económicos al contratista durante la ejecución, teniendo en cuenta el programa de desembolsos a la fiducia. 4ª. Que es voluntad de las partes celebrar el presente Otrosí, de acuerdo con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar la FORMA DE PAGO, la cual quedara así: **CLÁUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO:** La entidad **CONTRATANTE** pagará el valor de este contrato así: Un anticipo equivalente al 15% del valor total del contrato, y cuatro actas así: a) Una primera acta de pago correspondiente a la obra ejecutada cuyo valor no puede superar el monto del primer desembolso del 40%, girado a la fiducia; en esta acta se amortizará la totalidad del anticipo entregado al **CONTRATISTA**. b) Una segunda acta correspondiente al pago de obra ejecutada, cuyo valor acumulado no supere el 70% del desembolso girado a la fiducia. c) Se presentará el acta de obra No. 3, cuando se cumpla con la ejecución del 90%, por un valor máximo acumulado del 90% del valor del contrato. d) Un pago final del 10% del valor total o saldo del contrato, cuando la obra se haya realizado en un 100% y haya sido recibido a satisfacción por parte de la Interventoría. **PARAGRAFO UNO:** Para la realización de los pagos parciales **EL CONTRATISTA** deberá presentar al **CONTRATANTE** las actas por los servicios prestados, previa aprobación de la coordinación técnica establecida por la entidad. **PARAGRAFO DOS:** Los pagos señalados en la presente cláusula quedan condicionados a que **EL CONTRATISTA** acredite el cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002. **PARÁGRAFO TRES:** La entidad **CONTRATANTE**, no reconocerá ningún reajuste realizado por **EL CONTRATISTA** en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. **PARAGRAFO CUATRO:** Entre el Fondo nacional de Calamidades – Subcuenta Colombia Humanitaria-, la FIDUPREVISORA S.A. y el Departamento de Antioquia, se celebró un Convenio Interadministrativo, donde se transfiriese los recursos para obra mayor a un Encargo Fiduciario, aperturado en la Cartera Colectiva Efectivo a la Vista, administrada por la FIDUPREVISORA S.A., a nombre del Departamento de Antioquia, para su correspondiente manejo financiero. En todo caso los recursos de que trata la presente forma de pago se cancelaran al **CONTRATISTA**, siempre y cuando existan recursos disponibles en el Encargo Fiduciario abierto para tal fin. **PARÁGRAFO CINCO:** El pago final se realizará previo cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) Recibo a satisfacción de la obra; (ii) Aprobación de la garantía de estabilidad de la Obra, cuando sea el caso. **CLAUSULA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO:** El presente Otrosí al contrato se entiende perfeccionado con la suscripción por las partes. Igualmente requiere actualización de pólizas y la publicación en la Gaceta Departamental, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos respectivos. **CLAUSULA TERCERA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Continúan vigentes todas las estipulaciones del Contrato de Obra y sus Otrosí, que no hayan sido modificadas por el presente documento.

23 NOV. 2011 N° 161086 1 Vez

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los



MARIA CRISTINA MESA ZAPATA
Secretaria de Infraestructura Física



RUTH ELENA TABARES ZULETA
Contratista

Resolución Número
(00285)

de 20 04 MAY 2012

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE PERSONERIA JURIDICA A UNA ENTIDAD
SE APRUEBAN SUS ESTATUTOS Y SE INSCRIBE A UNOS DIGNATARIOS**

EL GERENTE DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones legales, en especial de las conferidas por el Decreto 1682 del 10 de Julio de 2008 emanado por la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA y,

CONSIDERANDO

1. Que el Club de atletismo Guarne, cuya sigla es CAG, con domicilio en el municipio de Guarne, solicita a esta entidad por intermedio del señor DIEGO ALBERTO COLORADO AGUDELO, en su calidad de Presidente, se le reconozca Personería Jurídica, se aprueben sus Estatutos y se inscriba su Representante Legal y demás Dignatarios.
2. Que la documentación presentada se encuentra acorde con lo dispuesto en la Ley 181 de 1995 y Decretos 1227 y 1228 de 1.995 y que reúnen todos los requisitos exigidos en tales disposiciones,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer Personería Jurídica a la entidad denominada Club de atletismo Guarne, cuya sigla es CAG, con domicilio en el municipio de Guarne.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar sus Estatutos.

ARTICULO TERCERO: Inscribir en el libro respectivo el nombre del señor DIEGO ALBERTO COLORADO AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 70.812.246, como Representante Legal de la entidad denominada Club de atletismo Guarne, cuya sigla es CAG, con domicilio en el municipio de Guarne, en su calidad de Presidente. Así mismo inscribir a los siguientes Dignatarios:

JUAN ALEXANDER RESTREPO SANCHEZ	Vicepresidente,	C. C. N°. 70.754.913
JOANA EYBETTE CARDONA GALLEG0	Tesorero,	C. C. N°. 43.793.916
LUZ MARINA GALLEG0 DÍAZ	Secretario,	C. C. N°. 43.423.111
JUAN CARLOS CARÉ SANTOS	Vocal,	C. C. N°. 8.047.221
CARLOS MARIO VARGAS RESTREPO	Revisor Fiscal,	T. P. N°. 96296 – T
MARÍA ELENA RIVERA MARTINEZ	Comisión Disciplinaria,	C. C. N°. 21.784.620
JOSE MANUEL CÁRDENAS GALLEG0	Comisión Disciplinaria,	C. C. N°. 70.753.874
WILSON ARLEY FLÓREZ HERRERA	Comisión Disciplinaria,	C. C. N°. 70.754.480

Todos ellos ejercerán sus funciones para completar el período estatutario de cuatro (4) años, contados a partir del 18 de marzo de 2009, según los estatutos.

Publíquese la presente resolución en la Gaceta Departamental o en un Diario de amplia circulación en el departamento a costa de los interesados. Cumplido este requisito surte sus efectos legales.

N° 161087 1 Vez

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


ESTEBAN ESCOBAR VELEZ

Gerente

CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD Y LA FUNDACIÓN MEDELLÍN CONVENTION & VISITORS BUREAU – OFICINA DE COVENCIONES Y VISITANTES DE MEDELLÍN No. 2012AS350001

CONTRATANTE: Departamento de Antioquia – Secretaría de Productividad
CONTRATISTA: Fundación Medellín Convention & Visitors Bureau - Oficina de Convenciones y Visitantes de Medellín.
OBJETO: Fortalecimiento del sistema de información turística de Antioquia SITUR, como herramienta que permite generar políticas y programas para la competitividad y la promoción de la región como destino turístico a partir de la información que reporta sobre el comportamiento del sector.
VALOR: \$ 89.206.029 (IVA INCLUIDO)
PLAZO: 6 meses

Entre los suscritos a saber: **LUZ HELENA NARANJO OCAMPO**, mayor de edad, vecina de Medellín, identificado con cédula de ciudadanía No. 43.523.819 de Medellín, obrando como Secretaria de Productividad y Competitividad (E), con fundamento en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, ley 489 de 1998 y sus decretos reglamentarios y los Decretos Departamentales 0001 y 0007 del 2 de enero de 2012 y 1480 del 28 de junio de 2012 quien en adelante y para efectos de este convenio se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte, y por la otra parte, **ADRIANA GONZÁLEZ ZAPATA** con número de cédula 43.724.372 de Envigado Antioquia, quien actúa en nombre y representación legal de **LA FUNDACIÓN MEDELLÍN CONVENTION & VISITORS BUREAU - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE MEDELLÍN "EL BUREAU"** con NIT 811.008.634-8, entidad sin ánimo de lucro, constituida mediante resolución 085 del 29 de mayo de 1964, de la Gobernación de Antioquia, inscrita en la cámara de comercio de Medellín para Antioquia el 22 de julio de 1998, en el libro 1, bajo el N° 5197 quien en adelante se denominará **"EL ASOCIADO"** y **CONSIDERANDO:**

a) Dentro del Plan de Desarrollo del Departamento, Antioquia la más Educada 2012-2015 en la línea 2 "La Educación como motor de transformación de Antioquia", que en su componente 2.2 Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento, destaca que el departamento se debe preparar para enfrentar el reto de ser un territorio con ventajas competitivas, basado en que no solamente podemos competir con bajos costos productivos, sino que se hace necesario innovar, diferenciar nuestros productos básicos y desarrollar sectores emergentes de talla mundial, en especial el turismo. A su vez este componente incluye un proyecto titulado "Gestión para la competitividad turística" que contiene un indicador que pretende la consolidación del Observatorio Turístico en su primera fase, cuyo punto de partida es el Sistema SITUR. b) La Gobernación de Antioquia - Secretaría de Productividad y Competitividad y la Fundación Medellín Convention & Visitors Bureau - Oficina de Convenciones y Visitantes de Medellín para cumplir con este objetivo, desean realizar una alianza con el propósito de realizar las actividades enfocadas a la medición del turismo a través de la Coordinación Estratégica del *Sistema de Indicadores Turísticos* –SITUR que ayude al fortalecimiento de la actividad turística del Departamento, como la herramienta principal de control para las decisiones y programas que se han emprendido para la promoción de Medellín y Antioquia como destinos turísticos. c) Que de acuerdo con la Ley 489 de 1998, artículo 96, se determina que "...Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquellas la ley¹". d) Que LA FUNDACIÓN MEDELLÍN CONVENTION & VISITORS BUREAU - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE MEDELLÍN "EL BUREAU" es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, enfocada al fomento y desarrollo del turismo tanto en la ciudad de Medellín como en el Departamento de Antioquia. H) Que este proceso contractual fue aprobado por el Comité de Orientación y Seguimiento de la Gobernación de Antioquia, mediante acta de fecha 26 de junio de 2012. Con fundamento en lo anteriormente expuesto hemos acordado celebrar el presente **CONVENIO DE ASOCIACIÓN**, de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO:** Fortalecimiento del sistema de información turística de Antioquia SITUR, como herramienta que permite generar políticas y programas para la competitividad y la promoción de la Región como destino turístico a partir de la información que reporta sobre el comportamiento del sector. **CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONVENIO.** El valor del presente Convenio es por la suma de ochenta y nueve millones doscientos seis mil veintinueve pesos \$ 89.206.029 los cuales son aportados de la siguiente forma: el **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**, Secretaria de Productividad y Competitividad con setenta y cinco millones

ochocientos veinticinco mil ciento veinticinco pesos (\$75.825.125) con recursos del rubro A.13.5/1135/0-1010/130304000/131006, según disponibilidad N° 3500022809 del 21 de marzo de 2012; El Aporte del ASOCIADO de acuerdo a su propuesta del 4 de junio de 2012 es de trece millones trescientos ochenta mil novecientos cuatro pesos (\$13.380.904), los cuales se encuentran discriminados en dicho documento y deberán estar reflejados en los informes presentados durante la ejecución del convenio.

PARAGRAFO PRIMERO. El Departamento desembolsará los recursos condicionados a los informes de ejecución que debe presentar EL ASOCIADO, los cuales serán analizados por el supervisor, de lo cual dejará constancia por escrito para proceder a ordenar los pagos correspondientes. **CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS.** El DEPARTAMENTO efectuará pagos mensuales contra entrega de un informe mensual de las actividades realizadas de la siguiente forma:

MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
\$24.720.000	\$10.300.000	\$10.300.000	\$10.300.000	\$10.300.000	\$9.905.125

El último desembolso se realizará una vez sea ejecutado el 100% de las actividades del convenio y previa presentación de informe final de actividades y la legalización de gastos por parte del ASOCIADO. **CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL ASOCIADO.** En desarrollo del presente Convenio, EL ASOCIADO se obliga a desarrollar las siguientes actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Convenio: a) Asumir la coordinación y la ejecución de las actividades a realizar dentro del convenio b) Aportar en especie trece millones trescientos ochenta mil novecientos cuatro pesos (\$13.380.904) c) consolidación estratégica del sistema, d) Fortalecimiento en las relaciones en las empresas vinculadas, e) Aumento de prestadores de servicios turísticos generadores de información, f) Generación de boletines y/o informes estratégicos de cifras de turismo, g) Coordinación del mantenimiento del software, h) Coordinación del diseño material de apoyo, i) Realizar un (1) evento de capacitación, cuatro (4) eventos sectoriales y la actualización y publicación de información relevante para los prestadores de servicios turísticos a través del sitio virtual de El Bureau. j) todas las demás que se desprendan de su propuesta y de los estudios previos. **CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.** En virtud del presente Convenio es compromiso del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA: a) Desembolsar al ASOCIADO oportunamente el valor de los aportes b) ejercer vigilancia a la ejecución de las actividades desarrolladas en el marco de este convenio c) suministrar la información requerida por el ASOCIADO para el desarrollo de las diferentes actividades que se desprendan del presente convenio. d) Las demás que tiendan al cumplimiento del objeto del presente Convenio. **CLÁUSULA SEXTA: SUPERVISORÍA, SEGUIMIENTO Y CONTROL.** La supervisión y seguimiento de la ejecución del presente Convenio estará a cargo del Servidor público que para tales efectos designe el Secretario de Productividad y Competitividad. **CLÁUSULA SÉPTIMA: FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN.** En virtud del presente Convenio son funciones de la supervisión las siguientes: a) Supervisar y hacer seguimiento de las actividades desarrolladas en ejecución del presente Convenio. b) Realizar seguimiento a los recursos financieros aportados por EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA para el desarrollo del Convenio. c) Propender por el cumplimiento del presente Convenio de conformidad con las políticas y plazos del Programa. d). Verificar que dentro del término pactado se cumpla el objeto de este Convenio. e) Debe vigilar y verificar el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. f) Las estipuladas por la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, en tanto sean aplicables a este tipo de convenios que se celebran con fundamento en la Ley 489 de 1998 y el Decreto 777 de 1992, g) Velar por la presencia de la imagen institucional del DEPARTAMENTO en los créditos correspondientes a la ejecución del convenio. **CLÁUSULA OCTAVA.- CONSTANCIA DE ESTAR AL DÍA CON PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD**

SOCIAL INTEGRAL. EL ASOCIADO se encuentra al momento de la suscripción del convenio al día con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (cajas de Compensación Familiar, Sena, ICBF) y deberá continuar a paz y

salvo con los mismos. **CLÁUSULA NOVENA: DURACIÓN DEL CONVENIO-** La duración del presente Convenio será de seis meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. **CLÁUSULA DECIMA: EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL -** En la ejecución del presente Convenio EL ASOCIADO actuará con plena autonomía sin perjuicio de la supervisión que se realizará a través de la supervisión. El presente Convenio no genera relación laboral entre las partes, ni con el personal que emplee EL ASOCIADO para las actividades objeto del mismo, y en consecuencia, tampoco al pago de prestaciones sociales. Tampoco se pacta régimen de solidaridad alguno ni de responsabilidad ante terceros, por lo que cada parte responderá con independencia por la ejecución de las actividades objeto del mismo. De igual manera las partes establecen que mediante el presente acuerdo, no se constituye entre ellas ningún vínculo de mandato ni de agencia comercial. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: MODIFICACIONES AL CONVENIO-** Cualquier modificación al presente Convenio deberá hacerse por mutuo acuerdo entre las partes y constar por escrito. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CAUSALES DE TERMINACIÓN-** El presente Convenio terminará por las siguientes causales: 1. Por el cumplimiento del término previsto para su duración. 2. Por imposibilidad de cumplir su objeto. 3. Por mutuo acuerdo entre las partes. 4. Por cumplimiento total de su objeto. 5. Por incumplimiento de alguna de las obligaciones a cargo de cualquiera de las partes. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN-** Terminado el Convenio se procederá a la liquidación de mutuo acuerdo, en un tiempo no superior a cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del convenio o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación; vencido este plazo y de no lograrse la liquidación bilateral, se liquidará unilateralmente por parte del Departamento de Antioquia – Secretaría de Productividad y Competitividad, dentro de los dos (2) meses siguientes al plazo previsto para la liquidación bilateral. Las partes suscribirán un acta en la cual se declararán a paz y salvo y se dejarán las constancias y los finiquitos correspondientes. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. PÓLIZAS Y GARANTÍAS. EL ASOCIADO** otorgará a favor del **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**, las siguientes pólizas: **a) cumplimiento:** Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Convenio con una vigencia igual al plazo y Seis meses más. **b) Responsabilidad Extracontractual:** No podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor del convenio, y en ningún caso inferior a doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 SMLMV) al momento de la expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía se otorgará por todo el período de ejecución del convenio. **d) Salarios Prestaciones Sociales e Indemnizaciones:** Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del convenio con una vigencia igual al plazo y tres años más. **CLAUSULA DECIMA QUINTA. PENAL PECUNIARIA.** En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del ASOCIADO, éste indemnizará al Departamento de Antioquia en una cuantía del 10% del valor total del Convenio. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** EL ASOCIADO, declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este Convenio, que no se halla incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución y la Ley. **CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES.** La Entidad contratante podrá dar por terminado unilateralmente este convenio, y exigir el pago de los perjuicios a que haya lugar, cuando EL ASOCIADO incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, previo agotamiento del debido proceso y derecho de defensa para el ASOCIADO, y que se encuentren debidamente demostrado que el incumplimiento por parte del ASOCIADO le es imputable exclusivamente a éste así como los perjuicios que se reclamen, determinados suficientemente en su cuantía, y que la

terminación unilateral sea declarada mediante acto administrativo debidamente motivado expedido por el DEPARTAMENTO en vigencia del incumplimiento. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. INDEMNIDAD:** EL ASOCIADO mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de toda reclamación proveniente de terceros que tenga como causa directa las actuaciones de EL ASOCIADO. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. CONCILIACIÓN:** Las partes acuerdan que en el evento de presentarse diferencias en razón de la celebración, ejecución, desarrollo y terminación del presente convenio procederán a realizar la conciliación prejudicial o extrajudicial, antes de iniciar cualquier acción judicial. **CLÁUSULA VIGESIMA. - GASTOS E IMPUESTOS:** Todos los gastos e impuestos que se causen por el presente Convenio, correrán por cuenta de EL ASOCIADO. **CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN** El presente convenio se entiende perfeccionado con el acuerdo de las partes, dado mediante la suscripción del mismo. Para su ejecución se requiere el respectivo Registro Presupuestal de Compromiso y la aprobación de las garantías exigidas. y la publicación en la Gaceta Departamental. **CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES-** Las partes convienen que la ciudad de Medellín, es lugar de cumplimiento del Convenio; así mismo, las comunicaciones que hayan de surtirse en desarrollo del mismo se dirigirán a las siguientes direcciones: ASOCIADO Calle 41 N° 55-80, Plaza Mayor, oficina 302, Medellín. EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, Gobernación de Antioquia, Centro Administrativo Departamental La Alpujarra, piso 6°, oficina 502, Secretaría de Productividad y Competitividad, Medellín. En constancia de lo anterior las partes firman el presente convenio a los,

N° 161088 1 Vez


LUZ HELENA NARANJO OCAMPOSecretaria de Productividad y Competitividad (E)
Gobernación de Antioquia
ADRIANA GONZALEZ ZAPATAGerente
ASOCIADO**RESOLUCION NÚMERO 0057_ DE 2012**

(25 DE JUNIO 2012)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL INICIO DE LAS LABORES DE LA ACTUALIZACION CATASTRAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE ENVIDADO - ANTIOQUIA"

EL DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CATASTRO, en ejercicio de sus facultades legales, conferidas por la ley 14 de 1983, el Decreto reglamentario 3496 de 1983, la Resolución 70 de 2011 del IGAC y La resolución 1700 de 2011 de la DSCI, y

CONSIDERANDO QUE:

La Actualización catastral es un proceso que se debe adelantar de manera obligatoria, dentro de periodos máximos de cinco (5) años, por disposición de la ley 14 de 1983 y demás normas reglamentarias.

El municipio de **ENVIDADO - ANTIOQUIA** se encuentra incurso en el término de ley para llevar a cabo el proceso de actualización catastral del sector **URBANO** y por ende, requiere de la expedición de la resolución de inicio.

La Dirección de Sistemas de Información y Catastro de Antioquia, para la emisión de dicho acto, de conformidad con las normas catastrales, determinó en comité técnico que para el inicio de la identificación predial en esta clase de sector, se debe contar con el Plan de Ordenamiento Territorial, cronograma de actividades a ejecutar, oficio informando el nombre de la persona natural o jurídica ejecutora de la actualización catastral y de la interventoría interna, copia de los contratos de interventoría y ejecución del proyecto, oficio designando al funcionario de catastro municipal como enlace entre la DSIC, el ejecutor y la interventoría del proyecto e identificación del predio y copia de los actos administrativos que hayan declarado la inminencia del riesgo de desplazamiento o de desplazamiento forzado.

Que por medio de acta N° 006 del 25 de Junio de 2012, se emitió concepto definitivo de cumplimiento de la anterior exigencia, como elementos indispensables para el inicio de las labores de la actualización catastral, por lo tanto, se procederá a ordenar éstas mediante el presente acto.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO ÚNICO: Ordenar la iniciación de las labores de actualización catastral del sector **URBANO** del municipio de **ENVIDADADO - ANTIOQUIA**, de conformidad con las disposiciones de carácter administrativo, técnico y jurídico vigentes, en especial las consagradas en la ley 14 de 1983, el Decreto Reglamentario número 3496 de 1983, la Resolución 70 de 2011 del IGAC y La resolución 1700 de 2011 de la DSCI, por las razones anotadas en la parte considerativa.

N° 161089 1 Vez

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


JUAN RODRIGO HIGUERA AGUILAR.
Director de Sistemas de Información y Catastro

RESOLUCION NÚMERO 060_ DE 2012

(25 DE JUNIO 2012)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL INICIO DE LAS LABORES DE LA ACTUALIZACION CATASTRAL EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIDADADO - ANTIOQUIA"

EL DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CATASTRO, en ejercicio de sus facultades legales, conferidas por la ley 14 de 1983, el Decreto reglamentario 3496 de 1983, la Resolución 70 de 2011 del IGAC y La resolución 1700 de 2011 de la DSCI, y

CONSIDERANDO QUE:

La Actualización catastral es un proceso que se debe adelantar de manera obligatoria, dentro de periodos máximos de cinco (5) años, por disposición de la ley 14 de 1983 y demás normas reglamentarias.

El municipio de **ENVIDADO - ANTIOQUIA** se encuentra incurso en el término de ley para llevar a cabo el proceso de actualización catastral del sector **RURAL** y por ende, requiere de la expedición de la resolución de inicio.

La Dirección de Sistemas de Información y Catastro de Antioquia, para la emisión de dicho acto, de conformidad con las normas catastrales, determinó en comité técnico que para el inicio de la identificación predial en esta clase de sector, se debe contar con el Plan de Ordenamiento Territorial, cronograma de actividades a ejecutar, oficio informando el nombre de la persona natural o jurídica ejecutora de la actualización catastral y de la interventoría interna, copia de los contratos de interventoría y ejecución del proyecto, oficio designando al funcionario de catastro municipal como enlace entre la DSIC, el ejecutor y la interventoría del proyecto e identificación del predio y copia de los actos administrativos que hayan declarado la inminencia del riesgo de desplazamiento o de desplazamiento forzado.

Que por medio de acta N° 006 del 25 de Junio de 2012, se emitió concepto definitivo de cumplimiento de la anterior exigencia, como elementos indispensables para el inicio de las labores de la actualización catastral, por lo tanto, se procederá a ordenar éstas mediante el presente acto.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO ÚNICO: Ordenar la iniciación de las labores de actualización catastral del sector **RURAL** del municipio de **ENVIDADO - ANTIOQUIA**, de conformidad con las disposiciones de carácter administrativo, técnico y jurídico vigentes, en especial las consagradas en la ley 14 de 1983, el Decreto Reglamentario número 3496 de 1983, la Resolución 70 de 2011 del IGAC y La resolución 1700 de 2011 de la DSCI, por las razones anotadas en la parte considerativa.

N° 161090 1 Vez

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


por **JUAN RODRIGO HIGUERA AGUILAR.**
Director de Sistemas de Información y Catastro

AUTO

Medellín,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 1396 de 1997, inscribase en el libro respectivo el nombre de la Hermana GLORIA ESTELA ZAPATA PINEDA identificada con cédula de ciudadanía N° 22.420.876 de Barranquilla (Atlántico), como Representante Legal de la entidad denominada **CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS PASIONISTAS DE SAN PABLO DE LA CRUZ**, con domicilio en Medellín, en su calidad de Superiora Provincial, quien ejercerá sus funciones a partir del 16 de septiembre de 2011, fecha de su designación.

Lo anterior, de conformidad con el certificado de la Arquidiócesis de Medellín del 24 de enero de 2012.

Publíquese en la Gaceta Departamental a costa de los interesados, surtido el trámite produce efectos legales.

N° 161091 1 Vez

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


ERIKA TATIANA SÁNCHEZ GÓMEZ
Directora Administrativa y Contractual

AUTO

Secretaria General

Medellín, 11 3 JUN. 2012

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6° del Decreto Nacional número 1529 del 12 de julio de 1990, inscribase en el libro respectivo los siguientes nombres y designaciones de la FUNDACION EDUCATIVA LINN HAITZ LEA, con domicilio en el Municipio de Medellín.

Teniendo en cuenta el Acta AGS-2012-01 de Asamblea General del 30 de marzo de 2012, inscribase los miembros de la Junta Directiva para un período de dos (2) años contados a partir de la fecha de su elección, con apego al Artículo 24 de los Estatutos de la Corporación.

Nombre	Cargo	Cédula
Wilson Enrique Sánchez Laguado	Presidente	98.562.501
José Israel Herrera Herrera	Vicepresidente	8.237.633
Jairo Ramírez Espindola	Tesorero	70.057.073
Lina María Taborda Ortega	Secretaria	43.640.250
Hernán Darío Quintana Valdes	Suplente	70.630.066
Libardo Gutiérrez	Suplente	2.225.752

Inscribase el nombramiento del señor ARMANDO NARANJO VALBUENA, identificado con cédula 5.944.107 como Representante Legal en su calidad de Gerente General, para un período de dos (2) años a partir de la fecha de su designación, de conformidad con el Acta JD-2012-01 del 30 de marzo de 2012.

Así mismo, anéxese al expediente la documentación relacionada con el nombramiento realizado en Acta AGS-2012-01 de Asamblea General del 30 de marzo de la presente anualidad, como Revisor Fiscal al señor JOHN FREDY MARTINEZ POSADA identificado con la cédula número 98.546.756, Tarjeta Profesional 100210-T para un período de dos (2) años contado a partir de la fecha de su elección.

Publíquese en la Gaceta Departamental a costa de los interesados, surtido el trámite produce efectos legales.

Nº 161092 1 Vez

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


ERIKA TATIANA SANCHEZ GOMEZ
Directora Administrativa y Contractual

**OTROSÍ 02 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL – Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT. No.890.980.096.1 2011-CF-1800.23**

Entre los suscritos a saber **DIEGO MIGUEL SIERRA BOTERO**, Secretario de Agricultura Departamental y Desarrollo Rural, identificado con cédula de ciudadanía N° 70.034.545 de Medellín, quien obra como delegado del señor Gobernador del Departamento de Antioquia para la celebración de Convenios, facultado por los Decretos Nos. 0007 y 0008 del 2 de Enero de 2012, en concordancia con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, que para los efectos de este Convenio se denominará **EL DEPARTAMENTO** y **MIGUEL ANGEL PELAEZ HENAO**, identificado con cédula de ciudadanía No.3.664.091, expedida en el Municipio de Yarumal Antioquia, quien en su calidad de Alcalde obra en nombre y en Representación Legal del Municipio de **YARUMAL**, según Acta de Posesión del 8 de Junio de 2012 y facultado para celebrar Convenios por el Acuerdo Municipal No.001 del 17 de Enero de 2012, hemos decidido celebrar el presente Otrosí No.02 al Convenio Interadministrativo No.2011.CF.1800-23, previas las siguientes consideraciones: **1.)** Este convenio fue firmado el día 23 de junio de 2011 y a la fecha presenta un atraso en la ejecución del proyecto, debido a que el Municipio tenía que hacer un proceso de Selección Abreviada de menor cuantía, para la construcción y compra de equipos que se requiere para poner en marcha esta planta de producción, el proceso No.001-2012 tuvo fecha de apertura el 12/03/2012 y fecha de cierre 23/03/2012, se adjudicó el 10/04/2012 con un plazo de ejecución de 6 meses y el Municipio no ha firmado el acta de inicio, debido a que el Alcalde electo para el periodo 2012-2015 fue destituido y el Alcalde encargado no tenía la potestad para este tipo de actos. **2)** Que dicha prórroga fue aprobada en el Acta No.14 del Comité de Interno de Contratación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de fecha 12 de junio de 2012 y en el Comité No.044 del Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación del Departamento de Antioquia de fecha 15 de junio 2012. **3-** Que se modificará la cláusula Sexta del Convenio No.2011.CF.1800.23, por las disposiciones contenidas en las siguientes cláusulas. **CLAUSULA PRIMERA:** Modificar la cláusula Sexta del Convenio No. 2011.CF.1800.23, cuyo objeto es: Adecuación, dotación y puesta en marcha de una planta procesadora de frutas en el Municipio de Yarumal, las cuales quedarán así: **PLAZO**, prorrogar el plazo del convenio No.2011.CF.1800.23 en Seis (6) meses más, contados a partir del 30 de Junio de 2012, (fecha actual de vencimiento del Convenio) y hasta el 29 de Diciembre de 2012. **CLAUSULA. SEGUNDA: GARANTÍAS.-** El Contratista se compromete a modificar las garantías constituidas para el Convenio original ajustadas a su nuevo plazo. **CLAUSULA TERCERA:** El Municipio deberá estar a paz y salvo con sus obligaciones frente a los sistemas de Seguridad Social Integral Y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). **CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Continúan vigentes todas las

estipulaciones del Convenio No.2011-CF-1800-23 que no hayan sido modificadas mediante la presente prórroga de plazo. **CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO.** El presente Otrosí, se perfecciona con la suscripción por las partes, para su ejecución se requiere: la aprobación de las garantías por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y publicación en la Gaceta Departamental por parte del Municipio de Yarumal, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los 25 días del mes de Junio de 2012

Nº 161093 1 Vez


DIEGO MIGUEL SIERRA BOTERO
Secretario Agricultura y Desarrollo Rural


MIGUEL ANGEL PELAEZ HENAO
Alcalde Municipio de Yarumal

RESOLUCION NÚMERO 0063_ DE 2012 de Planeación
(03 DE JULIO 2012)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL INICIO DE LAS LABORES DE LA ACTUALIZACION CATASTRAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE ANDES - ANTIOQUIA"

EL DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CATASTRO, en ejercicio de sus facultades legales, conferidas por la ley 14 de 1983, el Decreto reglamentario 3496 de 1983, la Resolución 70 de 2011 del IGAC y La resolución 1700 de 2011 de la DSCI, y

CONSIDERANDO QUE:

La Actualización catastral es un proceso que se debe adelantar de manera obligatoria, dentro de periodos máximos de cinco (5) años, por disposición de la ley 14 de 1983 y demás normas reglamentarias.

El municipio de **ANDES - ANTIOQUIA** se encuentra incurso en el término de ley para llevar a cabo el proceso de actualización catastral del sector **URBANO** y por ende, requiere de la expedición de la resolución de inicio.

La Dirección de Sistemas de Información y Catastro de Antioquia, para la emisión de dicho acto, de conformidad con las normas catastrales, determinó en comité técnico que para el inicio de la identificación predial en esta clase de sector, se debe contar con el Plan de Ordenamiento Territorial, cronograma de actividades a ejecutar, oficio informando el nombre de la persona natural o jurídica ejecutora de la actualización catastral y de la interventoría interna, copia de los contratos de interventoría y ejecución del proyecto, oficio designando al funcionario de catastro municipal como enlace entre la DSIC, el ejecutor y la interventoría del proyecto e identificación del predio y copia de los actos administrativos que hayan declarado la inminencia del riesgo de desplazamiento o de desplazamiento forzado.

Que por medio de acta Nº 007 del 03 de Julio de 2012, se emitió concepto definitivo

de cumplimiento de la anterior exigencia, como elementos indispensables para el inicio de las labores de la actualización catastral, por lo tanto, se procederá a ordenar éstas mediante el presente acto.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO ÚNICO: Ordenar la iniciación de las labores de actualización catastral del sector **URBANO** del municipio de **ANDES - ANTIOQUIA**, de conformidad con las disposiciones de carácter administrativo, técnico y jurídico vigentes, en especial las consagradas en la ley 14 de 1983, el Decreto Reglamentario número 3496 de 1983, la Resolución 70 de 2011 del IGAC y La resolución 1700 de 2011 de la DSCI, por las razones anotadas en la parte considerativa.

N° 161094 1 Vez

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


JUAN RODRIGO HIGUERA AGUILAR.
Director de Sistemas de Información y Catastro

DECRETO NÚMERO 1554 DE 2012
(04 JUL 2012)

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNA DELEGACIÓN"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial el artículo 305 numeral 10° de la Constitución Política y la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO

El artículo 305 numeral 10° de la Constitución Política, dispone que es atribución del Gobernador revisar los actos expedidos por los Concejos y Alcaldes Municipales, y por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad remitirlos al Tribunal Administrativo competente.

El inciso primero del artículo 9°, de la Ley 489 de 1998, dispone "Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias".

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Delegar en el Director de Asesoría Legal y de Control, adscrito a la Subsecretaría Jurídica – Secretaría General de la Gobernación de Antioquia, la atribución o función de revisar los actos expedidos por los Concejos Municipales y los Alcaldes.

ARTICULO SEGUNDO: Delegar en la Secretaría General la remisión de los actos administrativos al Tribunal Administrativo de Antioquia, cuando de la revisión se concluye que adolecen de inconstitucionalidad o ilegalidad.

ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el Decreto 266 de febrero 6 de 2007.

Dado en Medellín, a los 04 JUL 2012

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


SERGIO FAJARDO VALDERRAMA
Gobernador

